

**1381**

**AUTOS: “RIPOLL VET S.A. Y OTROS C/ PODER LEGISLATIVO - ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD - ART. 161 DE LA LEY N.º 19.438 ” - Ficha 1-40/2017**

**Suprema Corte de Justicia:**

1) En el sub-lite se deduce excepción de inconstitucionalidad respecto al art. 161 de la Ley N.º 19.438, el cual da nueva redacción al inciso tercero del art. 27 Título 4º del Texto Ordenado 1996.

El mencionado art. 27, referido al Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), dispone:

*“Configuración.- Quienes liquiden este impuesto por el régimen de contabilidad suficiente deberán incluir en la liquidación del tributo el resultado económico derivado de la variación del valor del signo monetario en la forma que se establece en los artículos siguientes.”*

*“No realizarán el ajuste los contribuyentes que no hayan obtenido ingresos provenientes de operaciones en el ejercicio.”*

*“El ajuste dispuesto en el presente artículo solamente se realizará en aquellos ejercicios en que el porcentaje de variación del Índice de Precios del Consumo (IPC) acumulado en los treinta y seis meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida supere el 100% (cien por ciento).”*

Sostienen la accionante que la norma viola el principio de la capacidad contributiva, al impedir la aplicación del ajuste fiscal por inflación; asimismo, entiende que se transgrediría el principio constitucional de igualdad.

2) Por cuanto se explicitará, esta Fiscalía considera que la acción promovida no podrá prosperar.

El art. 85 numeral 4º de la Constitución Nacional confiere potestad tributaria al Poder Legislativo, potestad que comprende naturalmente la determinación de los elementos en base a los cuales se calcula el monto de los tributos, criterios estos que son de resorte exclusivamente legal, pues pertenece al parquet de determinación propia que posee el legislador respecto del mérito o la conveniencia de la norma a aprobar. Y . son precisamente estos extremos , los que quedan fuera de la evaluación jurisdiccional al momento de establecer su compatibilidad con la Carta.

3) Este criterio, reiteradamente sostenido pro esta Fiscalía y por esa Corporación, importa, en el decir de esta, que la Suprema Corte de Justicia *“juzga no el mérito o desacierto legislativo, sino tan sólo si la Ley es o no constitucionalmente válida. La norma legal, que dentro de su competencia institucional dispone una solución equivocada, errónea, desacertada, respecto al punto que regula, será una mala Ley, pero no por ello es inconstitucional (cfm. Sents. Nos. 12/81, 69/82, 404/85, 237/87, 86/93, 131/03, entre otras). En sentido concordante cabe citar la opinión de Linares Quintana: "... el Poder Judicial excedería su ámbito específico y constitucional si entrara a juzgar los propósitos o motivos que pudieren haber inspirado al legislador en la aprobación de las Leyes, materia que está comprendida en el campo de la*

*política legislativa" (Teoría e Historia Constitucional, T. I, pág. 319/320)"*  
(Sentencia N.º 84/2009).

4) En el sub-exámine se estableció, como criterio de cálculo del monto resultante a imponer, que el ajuste por inflación incidiría en tanto se configurara el supuesto previsto por la norma impugnada, esto es, un contexto “hiperinflacionario.”

Por consiguiente, para una hipótesis de inflación menor no ha de operar el ajuste, lo cual innegablemente afecta la cuantificación de la obligación tributaria. Empero, la variación que podría producirse se encuentra dentro de ciertos parámetros tomando en cuenta una inflación inferior al 100% (cien por ciento) en tres años, constituyéndose esto último en un extremo que innegablemente es tenido en consideración por el legislador, incorporándose a la estructura del tributo.

5) La promotora de autos afirma que si no se efectúa el ajuste por inflación, el tributo recaería sobre lo que denomina “rentas ficticias”.

Ahora bien: la ausencia de ajuste en las hipótesis a las que refiere el accionante genera -es ello correcto- una diferencia cuantitativa entre lo que se paga y lo que hubiera correspondido abonar en caso contrario siendo posible teóricamente calificar esta construcción legal como un gravámen “a una renta ficticia”. No obstante ello, la **relevancia jurídica se halla determinada en el hecho generador y en la forma de cálculo** del gravamen prevista por el

legislador, independientemente de las calificaciones socio-económicas que ello conlleve.

Va de suyo que el presupuesto de hecho de todo impuesto tiene naturaleza económica, y dicha actividad o situación económica es la que aprecia el legislador en términos de “capacidad contributiva”, que no es otra cosa que la apreciación por parte del legislador de que el hecho económico que se ha verificado para el sujeto permite distraer una suma de dinero de sus necesidades privadas para destinarla a contribuir a los gastos públicos, tal como lo ha sostenido de forma reiterada la jurisprudencia del Alto Cuerpo.

6) Tratándose el caso de autos de un accionamiento por inconstitucionalidad de la ley, el promotor debió acreditar entonces que la variación producida al no efectuarse el ajuste por inflación se traduce en una imposición arbitraria que desconoce las posibilidades del contribuyente, o bien que excede de manera desproporcionada su obligación de contribución a las cargas pública, o, que transforma el tributo en confiscatorio el tributo de marras.

7) Finalmente, y en cuanto a la invocada transgresión al principio de igualdad, no le asiste razón a la parte actora. El tributo es aplicado de igual forma y con iguales parámetros para todos quienes se hallan en la misma posición relevante para la norma, no existiendo discriminaciones basadas en situaciones individuales.

Si acaso el proceso inflacionario pudiere generar perjuicios económicos no tachables de “idénticos” entre los obligados al pago, este extremo ha sido tenido en cuenta por el legislador, no obstante, los límites que este consideró razonables pertenece -como se señalara ut supra- al ámbito del mérito y la conveniencia de la norma, a excepción de las hipótesis de montos arbitrarios confiscatorios o fuera de todo límite de razonabilidad, lo cual no ha sido acreditado por la parte accionante en autos.

Por los fundamentos expresados, esta Fiscalía estima que que el accionamiento en vista no podrá prosperar, correspondiendo su **rechazo**.-

Montevideo, 17 de noviembre de 2017.-

MA/ma/sa

***Dr. Jorge Díaz Almeida***  
***Fiscal de Corte y Procurador***  
***General de la Nación***